

# Venezuela en transición

**L**as noticias provenientes de Venezuela han perdido el dramatismo de hace unos años, cuando una insurrección popular, dos intentos de golpe de Estado o la deposición de un presidente en Caracas ocuparon las planas de los periódicos de medio mundo. Hoy, la mayor tranquilidad política no sólo es consecuencia de la presidencia del veterano Rafael Caldera, sin duda más prudente que sus antecesores, sino además constituye un indicador de que algo de fondo puede estar cambiando en Venezuela. El ministro de Planificación, el socialista Teodoro Petkoff, lo expresaba así: «Estamos mal, pero vamos bien». En este artículo trataremos de sintetizar las grandes líneas de esta hora de la nación sudamericana, menos dramática pero probablemente más decisiva para el largo plazo que tiempos anteriores de violentas agitaciones.

**Raúl González Fabre\***

\* Jesuita. Miembro del Centro Gumilla de Investigación y Acción Social, y del Consejo de Redacción de la Revista *SIC*. Caracas, Venezuela.

## Los dos gobiernos de Caldera

**E**L Gobierno de Rafael Caldera cumplió a comienzos de febrero su tercer año, de un período constitucional de cinco. Sin embargo, los analistas aprecian con razón que en realidad en estos tres años se han sucedido dos gobiernos de línea económica opuesta, curiosamente conducidos por casi los mismos hombres. El primero de ellos, desde febrero de 1994 a marzo de 1996, se atuvo a las promesas electorales del presidente, negándose a negociar con el FMI, evitando subir la gasolina, limitando el IVA en lo posible, controlando la tasa de cambio y los precios de algunos artículos de primera necesidad, subsidiando servicios públicos o reteniendo los aumentos a costa de las empresas prestatarias, atendiendo las demandas de los diversos grupos de presión a base de emitir moneda inorgánica... en suma, un gobierno típico del populismo terminal. Este Gobierno tuvo que soportar una catástrofe bancaria gestada en el período anterior, que obligó a la estatización del 70 por 100 de los bancos del país, y por la que el Estado asumió pérdidas del orden de once mil millones de dólares. La crisis financiera, último gran episodio de la corrupción en Venezuela, fue especialmente mal gestionada por un ejecutivo carente de funcionarios capaces para semejante emergencia (pues los organismos estatales de control de la banca habían sido cuidadosamente desarticulados o corrompidos por los mismos banqueros antes de 1994).

Los dos primeros años del Gobierno Caldera adentraron la economía en un callejón sin salida, y defraudaron las esperanzas de los electores, pero permitieron también algunos logros políticos. En primer lugar, facilitaron recomponer la lealtad de los militares al sistema, merced a la habilidad personal del presidente, que en su larga carrera política nunca ha descuidado el contacto personal con las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, convencieron a la gente de la honestidad no sólo personal sino también política de Caldera. En un país de talante tan presidencialista como Venezuela, la diferencia entre el insospechable Caldera y el inexcusable Carlos Andrés Pérez permitió un voto de confianza popular al sistema. El Gobierno se equivocaba en su política económica, pero se equivocaba como la gente quería, intentando (bien que torpemente) defender los intereses de los ciudadanos comunes. Por último, la unión de estas dos circunstancias —buena voluntad evidente del Gobierno y fracaso de su gestión— impidió achacar la caída del nivel de vida a la corrupción o a una nueva traición gubernamental al pueblo. El alcance de las consecuencias de estos hechos, aparentemente coyunturales, será sin duda histórico para Venezuela: la opinión pública empezó a pedir un giro

radical en la política económica, que permitiera estabilizar las grandes cifras macroeconómicas, reactivar la inversión y reformar la estructura económica desde el rentismo apoyado en el petróleo hacia la competitividad en todos los sectores posibles. Cuando el clamor se hizo mayoritario y las perspectivas más sombrías que nunca, Caldera reorientó por completo su política económica a principios de 1996. Comenzó así su «segundo Gobierno».

Para los observadores independientes adentro del país, el significado de este giro no pasó inadvertido. No se trataba ya, como en tiempos de Carlos Andrés Pérez, de un presidente con mala reputación ejecutando a toda costa un programa neoliberal apoyado sólo en la oligarquía y en un grupo de tecnócratas políticamente irrelevantes, contra el consenso general de una población añorante del viejo populismo rentista. No. Ahora el presidente que proponía medidas semejantes es una persona que ha demostrado sensibilidad a la situación de las mayorías populares (por ejemplo, encabezó en su momento la comisión legislativa que redactó la actual Ley del Trabajo). Su equipo económico está formado por socialdemócratas y socialistas de larga trayectoria política (así, Teodoro Petkoff, del Movimiento de Hacienda, antes economista-jefe de la mayor central sindical del país), y ha conseguido para el programa económico el apoyo no sólo de las organizaciones políticas aliadas en el Gobierno, sino también de Acción Democrática (el partido más grande de Venezuela, de tendencia socialdemócrata), de las cámaras empresariales, de muchos sindicatos e importantes medios de comunicación.

Se trata de algo más que una configuración coyuntural de fuerzas. Podríamos tal vez equiparar el significado de estos hechos a la entrega de Hebrón al Gobierno palestino por el primer ministro israelí Netanyahu; sin duda ello constituye un acontecimiento político mucho más relevante para la paz que si la misma entrega la hubiera realizado Shimon Peres. Bien que a regañadientes, los secretos nacionales que habían sostenido la vía populista contra Carlos Andrés Pérez ahora la abandonan para reconocer que el futuro del país se juega en su capacidad productiva. Y el consenso nacional que ellos expresan marca el inicio de una hora distinta para Venezuela, el camino para poner fin a una crisis profunda que ha durado sin interrupción desde principios de los 80.

## Estamos mal

EL nuevo programa económico se concretó a través de un acuerdo *stand-by* de un año de duración con el FMI, con

el que se perseguía evitar la hiperinflación, en puertas como consecuencia de la trayectoria anterior del Gobierno y de la crisis bancaria. En realidad, había algo más, o algo menos, en el acuerdo. Los programas del Fondo suelen dirigirse a países con dificultades en sus cuentas externas, para prevenir una suspensión de pagos internacionales. No era ése el caso de Venezuela en 1996, sino que las reservas mantenían un nivel suficiente para cubrir el programa de ajuste sin ayuda exterior. La ayuda del FMI, más que financiera (de hecho, el Gobierno renunció al segundo tramo de los préstamos previstos) fue política: la garantía de la seriedad del giro. Esa garantía mejoró la posición del país en los mercados financieros internacionales, y facilitó la confianza interna en el éxito del programa.

Las medidas tomadas correspondieron muy de cerca al esquema «ortodoxo» que suele usarse para estos ajustes: una macrodevaluación (de Bs. 290 a Bs. 470 por dólar), seguida de seguridades sobre la estabilidad del nuevo tipo de cambio; fin del control de divisas; disciplina fiscal estricta para el Gobierno; ajustes de los precios de los servicios públicos, sinceración del precio de la gasolina; elevación de impuestos... Las mayores diferencias con el programa desarrollado por los neoliberales de Carlos Andrés Pérez hay que buscarlas en la ejecución inmediata de los programas sociales (que en el intento anterior llegaron tarde, tras dos años de dilación); y en el ambiente político, marcado por el deseo colectivo de acabar con una crisis ya demasiado larga, y por el liderazgo del presidente Caldera y su ministro de Planificación.

Las consecuencias inmediatas sobre la vida de los venezolanos a lo largo de 1996 han sido las comunes en este tipo de programas: decrecimiento del consumo tanto público como privado, con la consiguiente caída del PIB no petrolero (- 3,6 por 100), y de ahí el aumento del desempleo abierto (hasta 11 por 100 ó 18 por 100, según las fuentes) en un contexto en que el empleo informal y el subempleo ocupan a la mitad de la población activa. El año cerró con una inflación del 103 por 100 (podía haber sido del 200 por 100 sin ajuste) y una nueva reducción del ingreso real de las familias, que viene descendiendo consistentemente desde 1979 (así, entre 1989 y 1996, los venezolanos perdimos el 52 por 100 de nuestro poder de compra).

Indudablemente, no son buenas noticias para el hombre de la calle. Algunos reflejos de esta situación advierte con facilidad el observador: por ejemplo, la consolidación de la violencia en las ciudades (más de 4.000 asesinatos en un país de 20 millones de habitantes durante 1996), el rebrote de las endemias (paludismo, dengue, cólera), o la disminución sensible de la talla promedio de los niños de una cohorte a otra, producto de la desnutri-

ción. Los servicios públicos básicos (salud, seguridad, educación y justicia) siguen su deterioro sostenido conforme la inversión estatal en ellos prácticamente se paraliza, falta a menudo el material elemental para trabajar, y el salario real de los funcionarios disminuye. La brecha salarial se ha abierto como nunca: desde los US\$ 105 del salario mínimo hasta los US\$ 30.000 mensuales en los altos niveles de gerencia de las grandes empresas. Eso por no contar a los que viven a salto de mata, sin percibir salario y sin protección legal en el trabajo.

Comoquiera que todo ello continúa un proceso iniciado casi dos décadas atrás, la comprensión de este momento de Venezuela depende más bien de la identificación de novedades en un panorama general de decadencia, y de la apreciación acerca de si estas novedades alcanzarán a estructurar de manera más justa y productiva las relaciones sociales.

## Vamos bien

**E**L programa de ajustes de 1996 puede exhibir también algunos logros importantes allí donde se proponía: Las cuentas del Estado han cerrado con superávit; como consecuencia, la inflación mensual ha bajado al 3 por 100, lo que permite esperar una tasa de 40 por 100 para 1997. El sistema legal y administrativo en torno a los impuestos ha sido racionalizado y hecho más efectivo. La tasa de cambio de la moneda se mantiene igual desde abril de 1996 hasta hoy, en un período de estabilidad desconocido después de 1983. La balanza de pagos ha conocido un superávit de más de US\$ 6.000 millones, lo que ha llevado a las reservas internacionales por encima de US\$ 15.000 millones, un nivel elevado para el tamaño de la economía venezolana (permite cubrir 17 meses de importaciones). La fuga de divisas ha cesado y, por el contrario, han empezado a entrar capitales extranjeros, no todos ellos especulativos, en volumen apreciable. Se ha reanudado la privatización de empresas productivas y financieras del Estado, y ha sido bien recibida la apertura de la industria petrolera nacional al capital privado...

Según podrá notarse, en todos los casos estos éxitos ponen de manifiesto una coyuntura macroeconómica boyante. Cuando se indaga en ellos con más detalle, puede notarse también la tendencia hacia un cambio en la estructura económica del país. Así, el año pasado fue uno de alza de los precios del petróleo, y de expansión al máximo de la capacidad productiva

petrolera de Venezuela. La mayor parte de los ingresos que han permitido al Gobierno subir las reservas y revertir el déficit en la balanza de pagos provienen de allí. Pero la manera de tomar este nuevo aumento de renta ha sido típicamente no rentista, contra lo que hubiera cabido esperar en un país tan marcado históricamente por el populismo y con una situación social tan precaria. El Gobierno no distribuyó el ingreso extraordinario sino que lo ha ahorrado, con vistas a constituir un Fondo de Estabilización que permita superar situaciones futuras de baja en los precios o los volúmenes de producción petroleros. La disciplina fiscal se mantuvo férreamente pese a las presiones de sindicatos y gremios profesionales; todas las huelgas de funcionarios han sido resistidas con éxito hasta ahora. El Plan de Inversiones de la industria petrolera nacional fue puesto en marcha de nuevo desde 1994, y rinde ya sus frutos (por ejemplo, más de la cuarta parte de la gasolina vendida en Estados Unidos lo es a través de la red de gasolineras de CITGO, una filial de Petróleos de Venezuela, también presente con fuerza en Centroeuropa a través de Veba-Oel). La privatización de las acciones estatales en la Telefónica venezolana contó con la participación de 60.000 pequeños y medianos ahorristas. Por su parte, la privatización de algunos bancos en manos del Estado a raíz de la crisis de 1994 ha permitido la entrada de grandes firmas de la banca extranjera (como el Banco de Santander y el Bilbao-Vizcaya) que ayudarán a superar las debilidades del sistema financiero nacional. El negocio petrolero se ha abierto efectivamente a capitales privados, tanto nacionales como foráneos, incluso a quienes sólo pueden participar con montos relativamente pequeños.

Todo ello indica sin lugar a dudas que el país se enrumba hacia la reconstitución productiva de su economía, y que el rentismo puede quedar en el pasado. Las grandes iniciativas de este «segundo Gobierno» de Caldera tienden a consolidar la idea de que Venezuela sólo se enriquecerá realmente produciendo más. La renta petrolera está siendo concebida como un apoyo para ello, que puede facilitar las transformaciones haciendo menor su costo, y no como la fuente para obtener gratuitamente lo que el Estado distribuye. La actividad petrolera misma se decanta hacia su industrialización, más allá de la mera explotación del recurso bruto, lo que significa que elementos como tecnología, organización y trabajo predominan sobre los precios internacionales fuera de nuestro control como lugar de donde se espera la rentabilidad. Detrás del trascendental giro no encontramos sólo la política de un Gobierno, sino también una suerte de consenso nacional que ha venido a cristalizar en este período. Ello da notable solidez al cambio que viene ocurriendo.

## Las perspectivas de futuro

ESTOS acontecimientos permiten esperar una recuperación del producto a partir de 1997, y con ella la disminución del desempleo y el incremento del ingreso familiar. No obstante, incluso desde el punto de vista económico, para que los buenos indicadores den de sí a corto plazo todo lo que cabe esperar en términos de inversión, son necesarios algunos cambios más problemáticos de llevar a cabo.

El primero de ellos se refiere a la seguridad jurídica. La legislación civil venezolana, recientemente complementada con una Ley sobre Propiedad Intelectual acorde a la era informática, es tan buena como cualquier otra. Pero la operación real de los tribunales puede llegar a ser tan venal que ello espanta a muchos posibles inversores. Actualmente un joven periodista cumple cárcel por la autoría de un libro titulado expresivamente *¿Cuánto vale un juez?* La acusación de difamación y libelo en su contra no deja lugar a dudas, puesto que no ofrece pruebas suficientes de lo que afirma; sin embargo, el sentir nacional pide un indulto a su favor, porque nadie duda tampoco del fondo de su tesis: que en Venezuela muchos jueces, secretarios y otros oficiales de tribunales se venden. Las propuestas del presidente a este respecto han bordeado lo inconstitucional, al sugerir la creación de una Alta Comisión de Justicia para depurar todo el sistema judicial, pasando por encima incluso de la Corte Suprema. En conjunto, no parece haber ni los mecanismos legales ni la voluntad política suficiente para una reforma a fondo del poder judicial, que afectaría a muchos intereses establecidos, y que no puede llevarse a cabo por la sola decisión del Ejecutivo sin amplio consenso. Faltando esa reforma, el país seguirá cojeando seriamente.

El segundo elemento consiste en el cambio de la actual legislación laboral, que dificulta enormemente tanto el despido como los aumentos de salario. Por el peculiar régimen laboral venezolano, cuando el trabajador sale de la empresa recibe un monto en concepto de «prestaciones» en que el tiempo se paga dos veces. Ello supone que cada aumento de salarios genera automáticamente al empresario una deuda con sus trabajadores por concepto de los servicios del pasado, que deberá ser cancelada al momento del despido. Este régimen fue pensado en tiempos de muy baja inflación con salarios estables, pero resulta insostenible ahora. Como consecuencia lógica, los empresarios venezolanos se resisten extraordinariamente a cualquier aumento salarial, el ingreso nominal de los trabajadores tiende a estacionarse y la inversión se retrae. Aunque los daños son evidentes y las soluciones estarían al

alcance de la mano, la dificultad política de renunciar a una «conquista de los trabajadores» impide que los sindicatos den su visto bueno a cualquier propuesta que incluya modificar las prestaciones. Llevamos ya tres años de negociaciones estériles al respecto, con perjuicio de todos. Muchos piden incluso al presidente que reclame poderes extraordinarios al Congreso y reforme el sistema ejecutivamente. Pero Caldera sigue apostando a la vía del consenso, de la que, según su estilo característico de gobierno, se apartará sólo cuando la situación se haya deteriorado tanto que quienes se opongan a su intervención se arriesguen al repudio de la opinión pública. Esto puede ocurrir muy pronto.

Un tercer elemento necesario para el renacimiento productivo de Venezuela consiste en la seguridad física de personas y propiedades. La crisis ha traído consigo un incremento muy grande de la criminalidad, que atemoriza a los ciudadanos comunes y hace incurrir a las empresas en altos costos de seguridad. Sin embargo, la correlación entre el nivel de ingresos y la violencia urbana, con existir, no es total. Así, aunque en los dos últimos años el nivel de vida ha descendido sensiblemente con la pérdida del 30 por 100 del poder adquisitivo de las familias, el número de delitos se ha estabilizado sin que mediara una eficacia mayor de los cuerpos policiales. Parece sencillamente que las personas que iban a buscar su prosperidad por vías ilegales ya están en ello, mientras que los demás han encontrado razones morales para no hacerlo nunca, por malas que sean sus perspectivas. Por otra parte, el nivel de violencia urbana seguramente no disminuirá proporcionalmente al incremento del ingreso si éste se produce, por causa de la presencia del narcotráfico, el robo de vehículos, el juego, etc., que comprometen a quienes participan en ellas ofreciendo un tren de vida (y un prestigio entre sus pares) que difícilmente los muchachos pobres podrán obtener en ningún otro lugar. Dicho en términos económicos, la violencia probablemente sea inelástica respecto al ingreso, y deba ser tenida más bien por un problema cultural.

Efectivamente, en Venezuela como en tantas partes del mundo se han conformado subculturas juveniles en torno a la violencia y el delito, que parecen difíciles de desarraigar a corto plazo. El proceso mismo de la crisis ha facilitado la entrada de muchos a esas subculturas, pero ellas han cobrado vida propia, creando sus modos de vida, sus sistemas de valoraciones, sus esquemas de virtudes y sus figuras heroicas en torno al valor, la camaradería, el goce físico, la muerte. La tarea de minar las bases morales de tales subculturas rehaciendo las de la sociedad representa un desafío para todo Occidente, también para Venezuela. En la medida en que incluso las estructuras económicas están siendo directamente amenazadas (no digamos la cali-

dad de la convivencia, deteriorada hasta extremos dramáticos en muchos barrios suburbanos), una estrategia educativa llevada adelante por personas con autoridad moral resultará imprescindible.

## La derrota de la pobreza

LA mayor paradoja de Venezuela consiste sin duda en la existencia de una tasa de pobreza que supera el 80 por 100, sobre un territorio con riquezas naturales ingentes y poco poblado, en una nación democrática con instituciones al menos nominalmente modernas. Si la reactivación económica, y con ella el crecimiento del empleo y del ingreso, son condiciones necesarias para la derrota de la pobreza, no resultan con todo suficientes. Otros dos elementos deberán conjugarse: la recuperación del papel del Estado como proveedor de servicios públicos para la integración social, y la reconstitución familiar.

El primero de los tópicos recibe consenso general en Venezuela. Los grandes servicios públicos se han visto afectados por la reducción de las inversiones en ellos, por los recortes presupuestarios para su operación cotidiana, por la baja del poder de compra de los funcionarios, y por una corrupción bastante mejor organizada que los servicios mismos. El resultado ha venido a ser la escisión de la sociedad venezolana en dos categorías: el 15 por 100 que puede pagar salud, educación y seguridad privadas, y el 85 por 100 restante que han de contentarse con lo que el Estado tiene para ofrecer: en la mayor parte de los casos, servicios de nivel africano. Como es obvio, el primer grupo cuenta con muchas más oportunidades que el segundo para una incorporación productiva a la nueva estructura económica que se está fraguando. Tampoco es de extrañar que los primeros se sientan movidos a defenderse de los segundos cerrando calles públicas al paso e instalando garitas de vigilancia privada en las entradas de sus urbanizaciones. No se trata más que del símbolo urbanístico de una realidad social.

Si los servicios públicos de integración no pueden ser rescatados de la radical ineficiencia en que se encuentran, la marginalidad crecerá y se hará más dura, el Estado resultará una suerte de pozo sin fondo improductivo para la sociedad, y la posibilidad de construir un capital humano moderno para esta economía se verá amenazada. A largo plazo, las metas mismas de crecimiento económico exigen que las grandes instituciones estatales de redistribución operen con eficacia. Pero esto no es fácil, una vez que las redes

de la corrupción las han penetrado, en un contexto de gran fuerza de los sindicatos funcionariales y de escasez de recursos del Gobierno. En último término, el sufragio de los funcionarios públicos (1.200.000 en un país de diez millones de votantes) puede decidir elecciones.

La sociedad venezolana conoce en este momento un debate acerca de la responsabilidad del Estado en materia de servicios básicos, y sobre las modalidades en que esa responsabilidad debería ejercerse. Los niveles de ese debate son dos: uno primero ideológico, en que los académicos y empresarios neoliberales discuten con los intelectuales católicos, socialdemócratas y socialistas; y uno segundo más práctico, en que se ensayan modelos y se intenta encontrar hilos para salir del laberinto político. Comoquiera que las redes de servicios sociales populares más amplias y de mejor funcionamiento son las de la Iglesia, la presencia de ésta en ambos debates resulta de primera importancia. En el fondo, la cuestión central no es si en Venezuela puede establecerse de nueva planta una educación, una sanidad o una seguridad sociales eficaces (todo lo cual ha sido ya demostrado por la Iglesia misma, por ejemplo), sino qué hacer con las actuales y sus cientos de miles de funcionarios acostumbrados a actuar bajo esquemas viciados. En este espinoso punto, el Gobierno Caldera apenas ha avanzado un paso. Por el contrario, pese a tener a conocidos reformadores como ministros en las Carteras sociales, la necesidad de preservar la estabilidad política le ha impedido afrontar los conflictos que se seguirían de una reforma a fondo del Estado productor de servicios.

Finalmente, la derrota de la pobreza requiere un cambio en la cultura familiar venezolana. La situación al respecto puede ser difícil de entender desde afuera de Latinoamérica, pero su escala se apreciará con el siguiente dato: en Venezuela el número de niños nacidos fuera del matrimonio (civil) es mayor que el de nacidos adentro. El esquema familiar predominante en el país no es la familia nuclear sino uno matricéntrico, en que la mujer cambia de hombre con relativa facilidad y va teniendo hijos de los sucesivos varones con los que empareja. Los hijos se sienten ligados a ella mucho más que al padre respectivo, quien frecuentemente se ha desentendido de ellos. Debe notarse bien que éste es un esquema cultural cuyos mecanismos de autorreplicación han sido detalladamente descritos, no el resultado inmediato de opciones personales. Por otra parte, tampoco resulta universal: en las clases más cultivadas, en las familias de origen europeo y en ciertas regiones del país donde la penetración tradicional de la Iglesia fue mayor, abunda más el modelo familiar nuclear, aunque siempre con tendencia a articularse en torno a la madre.

La falta de padre y la sobreabundancia de madre constituyen dos síndromes muy característicos de los jóvenes venezolanos, que traen consigo un verdadero hándicap afectivo. El desequilibrio consecuente es arrastrado a lo largo de los años, dificultando la adhesión a esquemas organizativos modernos y el éxito en ellos (para el cual se requiere cierta madurez de la subjetividad, que la haga capaz de inhibirse oportunamente a favor de la disciplina en el trabajo y de las relaciones abstractas). Como ocurre que la sociedad venezolana ha apostado por la modernización para superar la pobreza, este rasgo cultural constituye una verdadera piedra en el zapato. La diferencia salta a la vista de quien conozca a gente de este pueblo: difícilmente alguien que pertenezca a una familia con padre y madre que se hicieron cargo de él a lo largo de toda su infancia, quedará en la marginalidad por mucho tiempo, por pobre que fuera su punto de partida; y por el contrario, quien haya debido crecer en medio del vendaval de pasiones que es una vida familiar descompuesta deberá hacer un esfuerzo notable para superar el hándicap que lleva adentro de sí. Muchos lo logran; otros no.

En esto, las políticas públicas venezolanas se han movido generalmente con realismo, tratando de fomentar mejores formas de integración familiar y a la vez reconociendo que la mayoría de los venezolanos experimentan y tienden a reproducir modelos problemáticos de familia (incluyendo a quienes son encargados por el Estado de formar a los jóvenes, como las maestras). Los medios de comunicación social, por el contrario, vienen caracterizándose últimamente por una irresponsabilidad notable. Fomentan ideas, imágenes y motivos del liberalismo sexual posmoderno tomadas de Estados Unidos o Europa (cuando aquí, por ejemplo, no hay padre contra el que rebelarse), y con ello ayudan a desorientar a mucha gente acerca de las claves para el éxito existencial. El tema vende bien, como no podía ser menos en una sociedad con grandes desequilibrios afectivos. Para los medios, el negocio es el negocio, aunque aproveche un drama nacional agudizándolo.

## Aprendizajes y asignaturas pendientes

**EMPLEO** bien remunerado, servicios públicos eficientes para todos, y algún género de esquema familiar que ayude a la maduración social de los individuos, componen quizás las claves para la superación de la pobreza en Venezuela. Particularmente en el primero de estos terrenos, la acción gubernamental durante el presente período

está conduciendo a la apertura de nuevas perspectivas. Puede decirse que en muchos sentidos el país aprende de sus propios errores, y que la autoridad moral del presidente y su equipo resulta valiosa en ese proceso. Pero aún quedan muchas asignaturas pendientes, que esta sociedad deberá plantearse pronto si quiere superar sus propios límites históricos.

Se ha aprendido acerca de la necesidad de una transformación productiva de la economía, del valor de la estabilidad política, de la importancia de situar la reducción de la marginalidad como objetivo central de la política económica, del lugar de la ética en la vida pública. Quedan pendientes, sin embargo, muchos conflictos con los esquemas anteriores, tanto en el nivel propiamente político de las definiciones institucionales y el balance justo de los intereses como en aquel otro cultural donde se asientan las bases de la convivencia. La profundidad de la crisis venezolana ha mostrado la relevancia de estos últimos aspectos para el éxito de nuestra sociedad, pero la decisión de abordarlos a fondo aún no ha sido tomada. Falta saber si las elites dirigentes venezolanas, las mismas que crearon al actual estado de cosas, se atreverán a apostar por un cambio; en otro caso, la esperanza habrá que ponerla en la sustitución generacional en ciernes. Mientras tanto, por primera vez en mucho tiempo, Venezuela tiene noticias realmente buenas que darse a sí misma.